



AUD.NACIONAL SALA DE LO SOCIAL  
MADRID

SENTENCIA: 00112/2015

A U D I E N C I A   N A C I O N A L

Sala de lo Social  
Secretaría de D<sup>a</sup>. MARTA JAUREGUIZAR SERRANO

SENTENCIA Nº: 112/2015



**Fecha de Juicio:** 24/06/2015  
**Fecha Sentencia:** 25/06/2015  
**Fecha Auto Aclaración:**  
**Núm. Procedimiento:** 81/2015  
**Tipo de Procedimiento:** DEMANDA  
**Procedim. Acumulados:**  
**Materia:** IMPUGNACION DE CONCILIACIÓN JUDICIAL  
ALCANZADA EN PROCEDIMIENTO DE  
CONFLICTO COLECTIVO  
D. RICARDO BODAS MARTÍN

**Ponente Ilmo. Sr.:**

**Índice de Sentencias:**  
**Contenido Sentencia:**

**Demandante:** -D. JESUS URIBE MANZANO  
-D. LEANDRO BATRES VALBUENA Y OTROS  
-D<sup>a</sup> ANA M<sup>a</sup> CASAS HIDALGO Y OTROS  
-UNIÓN SINDICAL OBRERA SECTOR DE  
TRANSPORTES AEREO (USO-ESTA)  
-CONFEDERACIÓN UNIÓN SINDICAL OBRERA  
(USO)

**Codemandante:**  
**Demandado:** -COMISIONES OBRERAS (CCOO)  
-ASOCIACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA DE  
TECNICOS AERONAUTICOS (ASETMA)  
-COMISIÓN DE TRABAJADORES  
ASAMBLEARIOS (CTA) Y CTA VUELO SECCION  
SINDICAL  
-SINDICATO ESPAÑOL DE LÍNEAS AÉREAS  
(SEPLA)  
-SINDICATO DE TRIPULANTES AUXILIARES DE  
VUELO DE LINEAS AEREAS DE ESPAÑA  
(STAVLA)  
-UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)  
-IBERIA L.A.E. S.A.U. OPERADORA  
-CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO  
(CGT)  
-COMITÉ INTERCENTROS DEL COLECTIVO DE  
TIERRA  
-SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRIPULANTES  
DE CABINA DE PASAJEROS DE LÍNEAS AÉREAS  
(SITCPLA)  
-COMITÉ DE EMPRESA DE VUELO DE IBERIA,

**Codemandado:**  
**Ministerio Fiscal**  
**Resolución de la Sentencia:** DESESTIMATORIA



**Breve Resumen de la Sentencia** : Impugnada una conciliación, alcanzada ante la propia Sala por la empresa y el 79, 25% de la representación sindical, se estima la excepción de falta de acción de los prejubilados que demandan a título individual, por cuanto dichos señores no ostentan la condición de terceros, al estar perfectamente representados por los representantes unitarios y sindicales demandados en el procedimiento de conflicto colectivo en el que se produjo la conciliación impugnada. - Se desestima la demanda, promovida por dos sindicatos, por cuanto la conciliación no vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de ningún trabajador, puesto que se alcanzó en un procedimiento de conflicto colectivo, que pretendía legítimamente obtener una interpretación uniforme para evitar la fuerte conflictividad individual existente, así como las respuestas judiciales contradictorias. - Se descarta que la conciliación despliegue retroactivamente efectos peyorativos respecto a lo acordado en mediación, puesto que reproduce exactamente lo convenio, retrendado por actos coetáneos y posteriores. - Se niega que lo acordado haya modificado peyorativamente lo pactado en acuerdo de mediación, convalidado por la Autoridad Laboral y niega finalmente que se esté aplicando a colectivos no representados en el procedimiento de conflicto colectivo.



A U D I E N C I A   N A C I O N A L

*Sala de lo Social*



Núm. de  
Procedimiento:  
Tipo de  
Procedimiento:

81/2015

DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE  
CONCILIACIÓN ALCANZADA EN  
PROCEDIMIENTO DE CONFLICTO  
COLECTIVO

Índice de  
Sentencia:  
Contenido  
Sentencia:  
Demandante:

-D. JESUS URIBE MANZANO  
-D. LEANDRO BATRES VALVUENA Y OTROS  
-D<sup>a</sup> ANA M<sup>a</sup> CASAS HIDALGO Y OTROS  
-UNIÓN SINDICAL OBRERA SECTOR DE  
TRANSPORTES AEREO (USO-ESTA)  
-CONFEDERACIÓN UNIÓN SINDICAL OBRERA  
(USO)

Codemandante:  
Demandado:

-COMISIONES OBRERAS (CCOO)  
-ASOCIACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA DE  
TECNICOS AERONAUTICOS (ASETMA)  
-COMISIÓN DE TRABAJADORES  
ASAMBLEARIOS (CTA) Y CTA VUELO SECCION  
SINDICAL  
-SINDICATO ESPAÑOL DE LINEAS AÉREAS  
(SEPLA)  
-SINDICATO DE TRIPULANTES AUXILIARES DE  
VUELO DE LINEAS AEREAS DE ESPAÑA  
(STAVLA)  
-UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)  
-IBERIA L.A.E. S.A.U. OPERADORA  
-CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO  
(CGT)  
-COMITÉ INTERCENTROS DEL COLECTIVO DE  
TIERRA  
-SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRIPULANTES  
DE CABINA DE PASAJEROS DE LÍNEAS AÉREAS  
(SITCPLA)  
-COMITÉ DE EMPRESA DE VUELO DE IBERIA,

Ponente Ilmo. Sr.:  
D. RICARDO EODAS MARTÍN



## **S E N T E N C I A   N.º:   112/2015**

**Ilmo. Sr. Presidente:**

**D. RICARDO BODAS MARTÍN**

**Ilmos. Sres. Magistrados:**

**D.ª EMILIA RUÍZ-JARABO QUEMADA**

**D. RAMÓN GALLO LLANOS**

Madrid, a veinticinco de junio de dos mil quince.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y

### **EN NOMBRE DEL REY**

Ha dictado la siguiente

### **SENTENCIA**

En el procedimiento nº 81/2015 seguido por demanda de D. JESUS URIBE MANZANO representado por el Letrado D. Jorge Aparicio Marbáñi, D. LEANDRO BATRES VALVUENA Y OTROS, representados por la letrada Margarita Iges, D.ª ANA M.ª CASAS HIDALGO Y OTROS representados por la letrada Araceli Barroso Testillano, STA-USO, USO CONFEDERACION (letrada Julia Bermejo) contra COMISIONES OBRERAS (letrado Ángel Martín Aguado), ASOCIACION SINDICAL ESPAÑOLA DE TECNICOS AERONAUTICOS (ASETMA) (letrada María Pía Fernández), CTA Y CTA VUELO SECCION SINDICAL (letrada D.ª Margarita Iges Lebrancón), SEPLA (letrado D. Oscar Orgeira Rodríguez), SINDICATO DE TRIPULANTES AUXILIARES DE VUELO DE LINEAS AEREAS DE ESPAÑA (STAVLA) (letrado Jorge Aparicio), UNION GENERAL DE TRABAJADORES (letrado Javier Berzosa), IBERIA L.A.E. S.A.U. OPERADORA (letrado Adriano Gómez), CGT (letrado D. Diego De Las Barreras), No comparecen citados en legal forma CTE. INTERCENTROS DEL COLECTIVO DE TIERRA, SITCPLA, CTE DE EMPRESA DE VUELO DE IBERIA, comparece el MINISTERIO FISCAL en su legal representación sobrebre impugnación de acta de conciliación, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RICARDO BODAS MARTÍN

### **ANTECEDENTES DE HECHO**



**Primero.-** Según consta en autos, el día 30-03-2015 se presentó demanda por D. JESUS URIBE MANZANO, D. LEANDRO BATRES VALVUENA Y OTROS, D<sup>a</sup> ANA M<sup>a</sup> CASAS HIDALGO Y OTROS, UNIÓN SINDICAL OBRERA SECTOR DE TRANSPORTES AEREO (USO-ESTA), CONFEDERACIÓN UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) contra COMISIONES OBRERAS (CCOO), ASOCIACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA DE TÉCNICOS AERONÁUTICOS (ASETMA), COMISIÓN DE TRABAJADORES ASAMBLEARIOS (CTA) Y CTA VUELO SECCION SINDICAL, SINDICATO ESPAÑOL DE LÍNEAS AÉREAS (SEPLA), SINDICATO DE TRIPULANTES AUXILIARES DE VUELO DE LINEAS AEREAS DE ESPAÑA (STAVLA), UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT), IBERIA L.A.E. S.A.U. OPERADORA, CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT), COMITÉ INTERCENTROS DEL COLECTIVO DE TIERRA, SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS DE LÍNEAS AÉREAS (SITCPLA), COMITÉ DE EMPRESA DE VUELO DE IBERIA, MINISTERIO FISCAL de impugnación de acta de conciliación.

**Segundo.-** La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día 24-06-2015 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otros al de prueba.

**Tercero.-** Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto.

**Cuarto. -** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social debe destacarse, que las partes debatieron sobre los extremos siguientes:

DOÑA ARACELI BARROSO TESTILLANO, en nombre y representación de 219 trabajadores, ratificó su demanda de impugnación de conciliación, alcanzada ante esta Sala el 17-02-2015 en procedimiento de conflicto colectivo promovido por la empresa, por cuanto los firmantes de dicha conciliación no estaban legitimados para modificar el acuerdo de mediación de 13-03-2013, en el que se distinguió claramente entre los trabajadores, cuyos contratos se extinguían y quienes permanecían en la empresa, previéndose únicamente para estos últimos reducciones retributivas, habiéndose entendido así por STSJ Madrid de 3-06-2014, rec. 104/2014, por lo que la decisión de incluir reducciones retributivas para los prejubilados supuso una vulneración frontal del acuerdo de mediación antes dicho.

Denunció, por otro lado, que se ha aplicado lo acordado en la conciliación impugnada al colectivo de TCP por parte de la empresa demandada.

Sostuvo finalmente que la conciliación impugnada desplegaba efectos retroactivos para el personal prejubilado con la finalidad de limitar su derecho a la tutela judicial efectiva.

USO y USO STA ratificaron su demanda de impugnación de la conciliación ya citada, subrayando, por una parte, que la conciliación impugnada no interpretó el acuerdo de mediación, sino que lo modificó por sujetos no legitimados para hacerlo, con la finalidad de limitar el derecho a la tutela judicial efectiva de los prejubilados. - Denunciaron del mismo modo que se está aplicando a todos los colectivos, aunque su ámbito de afectación era únicamente el colectivo de tierra. - Denunciaron



finalmente la aplicación retroactiva de lo acordado, vulnerando, por consiguiente, el art. 9.3 CE.

DOÑA MARGARITA IGES LEBRANCON, en nombre y representación de don Leandro Batres Valbuena y varios más ratificó su demanda, subrayando, en primer término, que los firmantes de la conciliación no estaban legitimados para modificar la resolución administrativa que autorizó las extinciones, donde quedaba perfectamente clara la distinción entre extinciones contractuales y el personal que permanecía en la empresa.

DON JORGE APARICIO MARBAN, en nombre y representación de don Jesús Uribe Manzano ratificó su demanda de impugnación de conciliación, subrayando que los firmantes de la conciliación no estaban legitimados para comprometerse en nombre de los trabajadores prejubilados, puesto que ya no les representaban. – Destacó, por otro lado, que lo pactado en conciliación fue ilegal, puesto que modificó el acuerdo de mediación, que distinguió claramente el tratamiento del personal que extinguía sus contratos de trabajo respecto del personal que permanecía en la empresa, a quien podían aplicarse únicamente reducciones retributivas. – Denunció finalmente que lo acordado en conciliación era lesivo, puesto que impedía acceder a la tutela judicial efectiva y constituía un manifiesto abuso de derecho, destacando, en todo caso, que no desplegaba efectos de cosa juzgada, sino de convenio colectivo.

La CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO solicitó sentencia conforme a derecho.

IBERIA LAE SAU OPERADORA (IBERIA desde aquí) se opuso a las demandas acumuladas y excepcionó falta de legitimación activa de los demandantes individuales, por cuanto ni fueron parte en la conciliación impugnada, ni ostentan la condición de terceros, puesto que estaban representados por los sindicatos demandados en aquel procedimiento, en el que se pretendió la interpretación del acuerdo de mediación de 13-03-2013, suscrito por el 81, 8% de la RLT, debido a la enorme proliferación de demandas individuales, que superaron las 400, alcanzándose finalmente un acuerdo con UGT, CCOO y ASETMA, quienes representaban el 70, 15% de la RLT de toda la empresa y el 79, 25% del personal de tierra, que es el único colectivo a quien afecta la conciliación impugnada, destacando, en todo caso, que el acuerdo de mediación de 13-03-2013 no tiene efectos de convenio colectivo, porque no lo dispone así la ley, ni se registró debidamente.

Negó que la conciliación desplegara efectos retroactivos, puesto que se limitó a interpretar el acuerdo de mediación reiterado, que no se modificó, salvo en la supresión de la reducción del 4% para los prejubilados en el período 15-04-2013 a 14-04-2014 en concordancia con lo pactado en el XXI Convenio de la empresa.

Negó, del mismo modo, que el acuerdo comporte privar a los trabajadores de la tutela judicial efectiva, como no podría ser de otro modo, puesto que el art. 153.1 LRJS permite promover conflictos colectivos para la interpretación de acuerdos de mediación.

Denunció que los actores pretenden reabrir materias, que se cerraron con la conciliación impugnada, sin que lo amparen algunas sentencias que les han sido favorables, puesto que hay tres favorables a la tesis actora y tres contrarias. – Destacó, en cualquier caso, que no se modificó el acuerdo de mediación, como lo acredita el acta de la comisión de seguimiento de 14-08-2013, donde quedó claro que el salario regulador, aplicable a los prejubilados, era el que percibieran en el





momento de la extinción, como no podría ser de otro modo, puesto que las extinciones pivotaban sobre la voluntariedad de los afectados en un período de dos años y medio. - Negó, en todo caso, que se produjera fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

Negó que la conciliación modificara el ERE 72/2001, puesto que allí se pactó que el salario regulador sería el percibido en el momento de la extinción, que es exactamente lo que ha hecho la empresa.

Negó finalmente que se esté aplicando lo pactado al colectivo TCP, aunque admitió que una sentencia de un Juzgado Social de Madrid aplicó la doctrina de la STSJ Madrid de 3-06-2014, si bien otro Juzgado de Madrid no ha compartido dicho criterio.

UGT, CCOO y ASETMA se opusieron a las demandas acumuladas, reproduciendo básicamente la argumentación de la empresa.

SEPLA solicitó sentencia conforme a derecho.

Los demandantes se opusieron a la excepción de falta de legitimación activa de las personas físicas, puesto que todos ellos son prejubilados a quienes perjudica necesariamente la conciliación impugnada, destacando, en todo caso, que doña María Teresa Costa Durán, a quien se aplicó lo acordado en conciliación, no es personal de tierra.

El MINISTERIO FISCAL defendió la falta de legitimación activa de las personas físicas, puesto que estuvieron representadas por los sindicatos en el procedimiento en el que se alcanzó la conciliación impugnada.

Sostuvo, por otro lado, que la conciliación impugnada no vulneró la legalidad, ni se acreditó la concurrencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

**Quinto.** - Cumpliendo el mandato del art. 85.6 de la Ley 36/2011, de 14 de octubre, se significa que los hechos controvertidos fueron los siguientes:

- En lo que afecta a la conciliación AN la firmaron el 70,15% del conjunto del personal de Iberia y el 79,25% del personal de tierra.

- Hay 3 Sentencias favorables a los actores y 3 contrarias.

- La Comisión seguimiento el 14-8-13 contenido en descripción 174 avaló la reducción.

- En ERE 72/01 el salario regulador debía ser el vigente a fecha de la extinción.

- Se niega que se aplique la conciliación AN a TCP'S.

- Hay una Sentencia del Juzgado Social nº 29 de Madrid que afecta a una TCP'S cuyo contrato se habría extinguido por cese optativo extendiéndose la doctrina de la STSJM, hay otra Sentencia del Juzgado Social 9 Madrid de 21-7-14 en la que no se aplica la doctrina de la STSJM.

- Hay un acuerdo de Comisión Negociadora de 2-4-13 en que se modifica en ERE 2001 respecto del IPC.

**Hechos Pacíficos:**

- El acuerdo de mediación de 13-3-13 se suscribió por el 81,8% de la representación de los trabajadores.

- El acuerdo de mediación no se registró.

- Se han producido más de 400 demandas individuales.



-En conciliación AN se acordó la devolución del 4% a prejubilados entre 15-4-13 a 15-4-14 con efectos de 15-4-14.

Resultando y así se declaran, los siguientes

### HECHOS PROBADOS

**PRIMERO.** – Por Resolución de 26 de diciembre de 2001 la Dirección General de Trabajo, concluyó el Expediente de Regulación de Empleo 72/01 autorizando a Iberia Líneas Aéreas de España S.A. la extinción de 2.515 relaciones laborales en los términos y condiciones que se recogían en el Plan Social y de Acompañamiento. Entre las modalidades de extinción se incluían las prejubilaciones, para aquellos trabajadores fijos de actividad continuada a tiempo completo con 58 años cumplidos. Los trabajadores que se acogieran a esta modalidad, previa solicitud irrevocable del trabajador y aceptación por la empresa, percibirían de Iberia las siguientes partidas:

1º. - Desde el momento de la extinción del contrato hasta cumplir los 60 años de edad: Iberia abonaría en 12 pagas anuales la diferencia entre el 90 % del Salario Regulador que a continuación se establecía y la prestación que por desempleo le correspondiese percibir.

2º. - Desde los 60 años de edad o desde la extinción del contrato de trabajo si esta fuera posterior a la antedicha edad y hasta cumplir los 65 años de edad: Iberia abonaría en 12 pagas anuales la diferencia entre el 80 % del Salario Regulador que a continuación se establecía y la prestación que por desempleo le correspondiese percibir.

El Salario regulador se determinaría por la suma de los conceptos fijos anuales (es decir, percibidos en las quince pagas abonadas en la empresa) del nivel ostentado por el trabajador en el momento de la extinción del contrato de trabajo que a continuación se indicaban dividido entre 12: Sueldo base, Antigüedad, Prima de Productividad, Complemento transitorio y Clave 122, en su caso.

Comenzaron así las extinciones de trabajo en la modalidad de prejubilación al amparo del denominado ERE 72/01, siendo el expediente objeto de sucesivas prórrogas en los años 2002, 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010, manteniendo esta última la vigencia del ERE 72/01 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Los trabajadores que se fueron acogiendo a esta modalidad extintiva percibieron de Iberia las retribuciones descritas, calculándose el Salario Regulador por los conceptos fijos anuales referidos, sin ningún descuento o reducción acordada por la empresa con carácter previo a la extinción. Así ocurrió hasta el primer trimestre del año 2013, donde a los trabajadores prejubilados se les calculó el Salario Regulador conforme a las cuantías fijas del Sueldo Base, Antigüedad, Prima de Productividad, Complemento Transitorio y Clave 122, en su caso, que habían venido percibiendo, sin reducción salarial de ningún tipo.

**SEGUNDO.** – El 12 de febrero de 2013, la empresa Iberia LAE SAU Operadora comunicó la apertura de un periodo de consultas para proceder al despido colectivo de 3.807 trabajadores, dando lugar al procedimiento de despido colectivo 97/2013.

Paralelamente, con fecha 1 de marzo de 2013 la empresa Iberia planteó sendos procedimientos de inaplicación de determinadas condiciones de los convenios



colectivos vigentes, como medida de acompañamiento social en los términos previstos en el artículo 8.1.e) RD 1483/2012.

Mediante acuerdo de la empresa Iberia y de todos los Sindicatos presentes en las Mesas de Negociación, el 22 de febrero de 2013 se procedió al nombramiento como mediador D. Gregorio Tudela Cambroner, al amparo de lo dispuesto en los artículos 51.2 ET y 28.4 del RD 1483/2012.

La mediación se desarrolló con un planteamiento global, abarcando a todos los colectivos de la empresa y a las medidas de despido y de modificación o inaplicación de condiciones retributivas y de trabajo. Tras la celebración de diversas reuniones con el mediador, el 6 de marzo de 2013 éste formuló una propuesta en la que se contenían tanto previsiones respecto de los despidos, en cuanto a su número y a las condiciones en que habrían de tener lugar los mismos, como respecto a las medidas relativas a las condiciones de trabajo, retributivas y no, de los trabajadores que permanecieran en la empresa.

Finalmente, el 13 de marzo de 2013 se llegó a un Acuerdo entre la empresa demandada y los sindicatos SEPLA, UGT, CCOO, ASETMA, CTA, SITCPLA y CTA-VUELO, quienes acreditaban el 81,8% de los representantes de los trabajadores de Iberia, teniéndose en consecuencia por finalizado con acuerdo tanto el procedimiento de despido colectivo como los procedimientos de inaplicación de condiciones de trabajo. Tal como se contiene en los puntos 1, 2, y 7 del apartado de II, se llegó a los siguientes acuerdos:

*"1. Ante la urgencia de la Compañía Iberia de reducir su actual plantilla, se acuerda utilizar como vía extintiva, durante el periodo 2013-2015, los instrumentos previstos en el vigente ERE 72/01, que se aplicará a un mínimo de 3.141 trabajadores, sin perjuicio de que dicha vía pueda utilizarse, con carácter voluntario, por encima de dicho número durante el periodo de su vigencia. A tal efecto se prorroga la vigencia de dicho ERE 72/01 hasta diciembre de 2015. (...)*

*2. Los trabajadores que mantienen sus puestos de trabajo en la Compañía aceptan un ajuste salarial directo en las tablas vigentes, para todas las categorías y niveles profesionales, en los siguientes términos: a) Pilotos: 14 %; b) TCPs: 14 %; c) Personal de Tierra: 7 %*

*7. Dentro del mes siguiente a la firma del presente Acuerdo, las partes articularán un conjunto de medidas con el objeto de mejorar la productividad, relativas, como mínimo, a las siguientes materias y colectivos: (...) Transcurrido el mes de referencia sin haberse alcanzado acuerdos relativos a la mejora de la productividad, se procederá al incremento en cuatro puntos porcentuales del ajuste pactado en el punto 2 del presente Acuerdo".*

Dicho acuerdo no fue registrado, ni publicado en el BOE.

**TERCERO.** – El 2-04-2013 se reunió la empresa demandada con el comité intercentros y las secciones sindicales con representación en el mismo, alcanzándose acuerdo para la ejecución de lo pactado en mediación, que obra en autos y se tiene por reproducido, así como los anexos, en los que las partes desarrollaron lo convenido en el acuerdo de mediación, si bien parece oportuno reproducir el tratamiento del salario regulador para las extinciones por prejubilación:



*"El Salario Regulador se determinará de la siguiente forma: Por la suma de los conceptos fijos anuales del nivel ostentado por el trabajador en el momento de la extinción del contrato de trabajo que a continuación se indican, dividido entre 12: Sueldo base, Antigüedad, Prima de productividad, Complemento Transitorio y clave 122 en su caso.*

*Las cuantías de los conceptos anteriores se refieren a las existentes en el momento de la extinción del contrato de trabajo.*

*Desde el 1 de enero del año siguiente en que se produzca la extinción del contrato, con efectividad de 1 de enero de cada año y hasta el año en que el interesado cumpla los 65 años de edad, al Salario Regulador establecido en los apartados C-1 y C.2 se le aplicará una revalorización anual del 2%.*

*No obstante lo anterior, para los trabajadores que causen baja durante los años 2013, 2014 y 2015, al Salario Regulador establecido en las apartado C.1 y C.2 no se le aplicará ninguna revalorización durante los citados años".*

**CUARTO.** – El 4-04-2013 la empresa demandada notificó al comité intercentros y a las secciones sindicales la ejecución de la reducción retributiva convenida en el acuerdo de mediación con efectos de 15-03-2013 hasta el 31-12-2015.

**QUINTO.** – El 5-04-2013 se reunió la comisión de seguimiento del acuerdo, levantándose acta que obra en autos y se tiene por reproducida.

**SEXTO.** – El 9-04-2013 la Dirección General de Empleo dictó resolución complementaria en el ERE 72/2001, en cuya parte dispositiva se dijo lo siguiente:

*"1º.- Autorizar a la empresa Iberia Líneas Aéreas de España S.A Operadora S.U, la ampliación del período de acogimiento y aplicación del expediente de regulación de empleo 72/01 hasta el 31 de diciembre de 2015, respecto del personal integrado en el colectivo de TIERRA, para la extinción de un máximo de 2.256 contratos de trabajo del colectivo de trabajadores de Tierra en los términos planteados por la empresa en su solicitud de 5 de abril de 2013, de tal manera que no supere la cifra de la plantilla objetivo estructural de 10.000 trabajadores fijos de actividad continuada a tiempo completo hasta ahora autorizada; así como autorizar las adaptaciones y modificaciones del Plan Social de dicho colectivo de Tierra, todo ello en los términos y condiciones que se recogen en el Acuerdo suscrito entre la Dirección de la Empresa y los representantes de los trabajadores el día 2 de abril de 2013, copia del cual se adjunta a la presente resolución.*

*2º. Tener por reproducidos los demás pronunciamientos recogidos en la parte dispositiva de la resolución dictada el día 26-12-01, así como en las posteriores resoluciones complementarias referenciadas en el Antecedente Primero de la presente resolución, de conformidad con los términos y condiciones establecidos entre las partes en el Acuerdo de 2 de abril de 2013.*

*3º.- La empresa comunicará a esta Dirección General la aplicación de las medidas autorizadas conforme vayan poniéndose en práctica. Asimismo, deberá presentar antes el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) los documentos de cotización relativos a los trabajadores afectados".*

**SÉPTIMO.** – El 17-04-2013 IBERIA notificó a los representantes legales la decisión de reducir un 4% de las retribuciones de sus trabajadores, puesto que no se



alcanzó acuerdo en materia de productividad en el plazo pactado con efectos de 15-04-2013.

**OCTAVO.** – La empresa ha calculado el salario regulador de todos los trabajadores del colectivo de tierra, que se prejubilaban a partir del 15-03-2013, con una reducción del 11% (7+4). - No obstante, desde el 14-04-2014 la empresa solo está reduciendo el 7% a dicho personal.

**NOVENO.** – El 4-07-2013 dictamos sentencia en el procedimiento 97/2013, en la que convalidamos el despido colectivo.

**DÉCIMO.** – El 14-08-2013 se reunió nuevamente la comisión de seguimiento del acuerdo, en cuyo punto 12 se dijo lo siguiente:

Con qué descuento se están prejubilando las personas del mes de abril? ¿Con el 7% o con el 11% de descuento con respecto a los conceptos de uno de enero de 2013?

De conformidad con el Acuerdo de Mediación, la reducción salarial del 7% tiene efectividad desde el 15 de marzo de 2013. Así mismo, según lo establecido en el mismo la reducción salarial del 4% adicional, tiene efectividad desde el 15 de abril de 2013 para todos los trabajadores.

**UNDÉCIMO.** – El 7-10-2013 el Juzgado de lo Social nº 28 de Madrid dictó sentencia, que obra en autos y se tiene por reproducida, en la que desestimó la demanda de doña Pilar Bazaco Olmos contra IBERIA, en la que pretendía que el salario regulador de su prejubilación no sufriera la reducción del 11%. -- El 21-05-2013 el Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid dictó sentencia sobre la misma pretensión, en la que desestimó la demanda de don Manuel Pastor Zamora contra IBERIA. -- El 9-12-2014 el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid dictó sentencia con el mismo objeto, en la que desestimó la demanda de don José Fermín Jiménez Pérez contra IBERIA. -- El 21-11-2013 el Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid dictó sentencia sobre la misma cuestión, en la que desestimó la demanda de don José Franco Galván García contra Iberia, que fue revocada por STSJ Madrid de 3-06-2014.

El 12-09-2014 el Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid dictó sentencia sobre la misma pretensión, en la que estimó el derecho de doña Isabel Castro Gil a que no se redujera su salario regulador de la prejubilación un 11%. -- El 30-07-2014 el Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid dictó sentencia sobre el mismo tema, en la que estimó la demanda de doña María Ángeles Pérez Salazar.

Ninguna de las sentencias citadas es firme.

**DÉCIMO SEGUNDO.** – Penden actualmente más de 400 demandas de prejubilados de la empresa demandada, que reclaman que no se aplique reducción alguna al salario regulador de su prejubilación.

**DÉCIMO TERCERO.** – El 14-05-2014 se alcanzó preacuerdo entre la empresa demandada y los representantes de los trabajadores, que obra en autos y se tiene por reproducido, que alumbró el XX Convenio para el personal de tierra, publicado en el BOE de 22-05-2014.



**DÉCIMO CUARTO.** – El 18-08-2014 ASETMA interpuso demanda de conflicto colectivo frente a IBERIA, en cuyo suplico pidió sentencia por la que, estimando la demanda se declare el derecho de los trabajadores cuyos contratos se vieron extinguidos como consecuencia de la aplicación de las medidas extintivas previstas en Acuerdo de Mediación de 13 de marzo de 2013 y hubieran sufrido el descuento salarial del 7% y posterior del 4% conforme lo expuesto en el cuerpo de este escrito, se las deje de aplicar el descuento del 4% en sus precepciones mensuales abonadas por IBERIA LAE OPERADORA SAU con efecto desde la fecha de la firma del XX Convenio Colectivo en abril de 2014. – Dicha demanda fue desistida posteriormente.

**DÉCIMO QUINTO.** - El 17-02-2015 IBERIA interpuso demanda de conflicto colectivo contra su representación unitaria y sindical, que obra en autos y se tiene por reproducida, en cuyo suplico pidió se dictara sentencia, mediante la cual se declare:

*(1). - Que el Salario Regulador para el personal del colectivo de tierra que cause baja en la Compañía, con motivo del despido colectivo, y que ve extinguida su relación en el marco de la modalidad de "prejubilaciones", ha de ser el existente en el momento de la extinción de la relación laboral, y, en concreto:*

*(a) Para el personal cuyo contrato fue extinguido desde el día 15 de abril de 2013 y hasta el día 14 de abril de 2014: con una reducción del 11%.*

*(b) Para el personal cuyo contrato fue extinguido desde el día 15 de abril de 2014 en adelante: con una reducción del 7%.*

*(c) Para todo el personal, independientemente de su fecha de extinción contractual, sin tomar en consideración el importe que hubiera derivado de la aplicación de la cláusula de revisión salarial al IPC real de 2012.*

*(2) a. La rectitud de la práctica que hasta la fecha ha venido realizando IBERIA en ejecución de: .a. las medidas de reducción salarial del 7% y el 4% para su personal de tierra, en los términos contenidos en los Hechos del presente;*

*b. La inaplicación de la regularización derivada de la cláusula de revisión salarial al IPC real de 2012".*

**DÉCIMO SEXTO.** – El 17-02-2015 se alcanzó acuerdo ante esta Sala en los términos siguientes:

*"IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.U. OPERADORA, y los sindicatos demandados firmantes del acuerdo que se refleja en el presente acta de conciliación, esto es UGT, CC.OO. y ASETMA, convienen que:*

*"La aplicación e interpretación, en el marco del despido colectivo 97/13, del Acuerdo de Mediación (de fecha 13 de marzo de 2013) al personal de tierra que vea extinguida su relación laboral a través de la modalidad de "Prejubilaciones" prevista en el ERE 72/01, se llevará a cabo de conformidad con los siguientes criterios:*

*El Salario Regulador para el personal del colectivo de tierra que cause baja en la Compañía, y que ve extinguida su relación en el marco de la modalidad de "prejubilaciones" del ERE 72/01, ha de ser el existente en el momento de la extinción del contrato de trabajo, incluyendo las reducciones, congelaciones o cualesquiera*



otras medidas que le hubieren sido de aplicación conforme al Acuerdo de Mediación o cualquier otro instrumento.

Así, el cálculo de dicho Salario Regulador deberá contemplar:

- (a) Para todo el personal, una reducción del 7%.
- (b) Para todo el personal, no deberá tomar en consideración el importe que hubiera derivado de la aplicación de la cláusula de revisión salarial al IPC real de 2012.
- (c) Para el personal cuyo contrato se extinguió entre el 15 de abril del 2013 y el 14 de abril de 2014, una reducción adicional del 4%.

No obstante todo lo anterior, excepcionalmente, para el personal cuyo contrato se extinguió entre el 15 de abril de 2013 y el 14 de abril de 2014, se dejará de aplicar la indicada reducción adicional del 4% con efectos del 15 de abril de 2014, comprometiéndose la Compañía a regularizar y devolver el importe correspondiente a la reducción adicional a 15 de marzo de 2014. La regularización derivada del presente compromiso se producirá en el mes de marzo de 2015 y, a partir de ese momento, se producirá el abono de las cantidades que correspondan sin aplicación de la mencionada reducción adicional del 4%.

Ambas partes, IBERIA y los sindicatos codemandados UGT, CCOO y ASETMA, que suponen la mayoría de los representantes de los trabajadores y representan a la mayoría de los trabajadores afectados por el citado despido colectivo 97/13, dan su conformidad con los anteriores compromisos y criterios, entendiéndolos como ajustados a derecho y conformes a la interpretación de las estipulaciones contenidas en el Acuerdo de Mediación y del resto de documentos que con el mismo guardan relación, y, asimismo, declaran la rectitud de la práctica que hasta la fecha ha venido realizando IBERIA en ejecución de (i) las medidas de reducción salarial del 7% y el 4% para su personal de tierra, en los términos contenidos en la demanda y (j. i) la inaplicación de la regularización derivada de la cláusula de revisión salarial al IPC real de 2012. Y, con ello, dan lugar así a una situación de seguridad jurídica, al sentar el criterio de las partes respecto de la recta interpretación del Acuerdo en su día suscrito, criterio a aplicar en todos aquellos supuestos planteados, o que puedan plantearse, relativos a la interpretación del Acuerdo de Mediación y de los documentos que con el mismo guardan relación y a la aplicación de sus previsiones al personal de tierra que ha visto o vea extinguida su relación laboral por la vía de la prejubilación.

IBERIA, UGT, CCOO y ASETMA manifiestan que los anteriores acuerdos se formalizan sin perjuicio de la incidencia que pueda derivar de resolución que se dicte en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en los autos n°168/2013."

IBERIA, UGT, CCOO y ASETMA insisten en que cuentan con la suficiente legitimación para alcanzar este acuerdo y manifiestan su oposición a las manifestaciones expuestas por los no suscribientes del acuerdo".

Obran en autos las manifestaciones de oposición por parte de los sindicatos no firmantes, que se tienen por reproducidas.



**DÉCIMO SÉPTIMO.** – El 18-07-2014 el Juzgado de lo Social nº29 de Madrid dictó sentencia, que afectaba a la prejubilación de una TCP en la que aplicó la doctrina de STSJ Madrid de 3-06-2014, rec. 104/2014.

El 21-07-2014 el Juzgado de lo Social nº9 de Madrid dictó sentencia en su procedimiento 958/2013, en el que desestimó una demanda, que afectaba a la prejubilación de otra TCP.

Se han cumplido las previsiones legales.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.** - De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, h de la Ley 36/2011, de 14 de octubre, compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

**SEGUNDO.** - En cumplimiento de lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se hace constar que los anteriores hechos declarados probados se han obtenido de los medios de prueba siguientes:

- a. – El primero de la resolución citada, que obra como documento 20 de IBERIA (descripción 166 de autos), que fue reconocida de contrario.
- b. – El segundo no fue combatido, salvo en lo referido al porcentaje de representatividad de quienes firmaron el acuerdo de mediación, que se ha deducido de las actas electorales que obran como documento 4 de IBERIA (descripciones 149 a 150 de autos), que tienen crédito para la Sala, aunque no se reconocieran por los demandantes, quienes no practicaron prueba alguna para acreditar otra representatividad.
- c. – El tercero del acta y anexos que la acompañan, que obran como documento 24 de IBERIA (descripción 171 de autos), que fueron reconocidas de contrario.
- d. – El cuarto de la comunicación citada, que obra como documento 22 de IBERIA (descripción 169 de autos), que fue reconocida de contrario.
- e. – El quinto del acta de la comisión de seguimiento que obra como documento 25 de IBERIA (descripción 172 de autos), que fue reconocida de contrario.
- f. – El sexto de la resolución mencionada, que obra como documento 26 de IBERIA (descripción 173 de autos), que fue reconocida de contrario.
- g. – El séptimo de dicha notificación, que obra como documento 23 de IBERIA (descripción 170 de autos) que fue reconocida de contrario.
- h. – El octavo no fue controvertido.
- i. – El noveno de la sentencia mencionada que obra como documento 28 de IBERIA (descripción 175 de autos), que fue reconocida de contrario.
- j. – El décimo del acta de la comisión, que obra como documento 27 de IBERIA (descripción 174 de autos), que fue reconocida de contrario.



- k. – El undécimo de las demandas, que dieron lugar a las sentencias relacionadas, que obran como documentos 29 a 34 de IBERIA (descripciones 176 a 181 de autos), que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 319 LEC, puesto que se trata de documentos públicos, a tenor con lo dispuesto en el art. 317.1 LEC.
- l. – El décimo segundo es conforme.
- m. – El décimo tercero de los documentos 35 a 40 de IBERIA (descripciones 182 a 187 de autos), que fueron reconocidos de contrario.
- n. – El décimo cuarto de la demanda citada que obra como documento 11 de USO (descripción 239 de autos), que fue reconocida por los demás litigantes, así como del correo electrónico que comunicó el desistimiento, que obra como documento 12 de USO (descripción 240 de autos), que fue reconocido de contrario.
- o. – El décimo quinto de la demanda citada, que obra como documento 43 de IBERIA (descripción 190 de autos) que fue reconocida de contrario.
- p. – El décimo sexto de la conciliación mencionada, que obra como documento 44 de IBERIA (descripción 191 de autos), que fue reconocida de contrario.
- q. – El décimo séptimo de las sentencias citadas, que obran como documento 43 de USO (descripción 245 de autos), que fue reconocida de contrario y del documento 1 de IBERIA, aportado en el documento del juicio, que fue reconocido de contrario.

**TERCERO.** – IBERIA excepcionó falta de legitimación activa de los trabajadores, que impugnan individualmente la conciliación, por cuanto no fueron parte en el procedimiento 337/2014, en el que se gestó la conciliación impugnada, como no podría ser de otro modo, puesto que en la demanda se demandó al comité intercentros de la empresa, así como a las secciones sindicales presentes en la empresa, quienes representaban a todos los trabajadores de la empresa, tanto activos como pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 CE, adhiriéndose el Ministerio Fiscal a dicha excepción.

Los demandantes individuales se opusieron a la excepción, por cuanto todos ellos son prejubilados y lo eran ya al momento de interponerse la precitada demanda, por lo que los sindicatos demandados en la misma, así como el comité intercentros, no les representaba y con mayor razón no les representaban los sindicatos que firmaron el acuerdo de conciliación. – Defendieron, por consiguiente, su condición de terceros lesionados por el acuerdo, lo que les legitima para su impugnación por dicho motivo, así como por ilegalidad de lo convenido, que modificó injustificadamente lo acordado el 13-03-2013.

El art. 86.4 LRSJS dispone que la acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercitará ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los trámites y con los recursos establecidos en esta Ley. La acción caducará a los treinta días de la fecha de su celebración. Para los terceros perjudicados el plazo contará desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes podrán ejercitar la acción de nulidad por las causas que



invalidan los contratos y la impugnación por los posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad.

La conciliación impugnada, como anticipamos más arriba, se alcanzó en procedimiento de conflicto colectivo entre la empresa y los sindicatos UGT, CCOO y ASETMA, quienes acreditaban entonces el 79, 25% de los representantes del personal del colectivo de tierra, que es el afectado únicamente por la conciliación, de manera que lo acordado en conciliación en el procedimiento de conflicto colectivo despliega la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el art. 82 ET, puesto que quienes conciliaron acreditaron las legitimaciones exigidas por los arts. 87, 88 y 89 ET, de conformidad con lo dispuesto en el art. 156.4 LRJS, como admitió expresamente el representante legal del señor Uribe Manzano.

La Sala en su sentencia de 13-06-2014, proced. 105/2014, estudió si era posible o no impugnar por lesividad o ilegalidad un acuerdo de conciliación, alcanzado ante la propia Sala por sujetos colectivos legitimados, por los trabajadores afectados individualmente por el despido colectivo, alcanzando las conclusiones siguientes:

*"Hechas estas precisiones, la controversia se centra, vistos los términos en que se plantea la demanda y se suscita el debate en juicio, en resolver si el acuerdo conciliatorio alcanzado deviene impugnabile a través del cauce previsto en el art. 84.6 LRJS y por cuanto introduce un expreso reconocimiento de la existencia de causa para el despido colectivo y del cumplimiento de los requisitos formales en el trámite de consultas. Dispone el art. 84.6 LRJS que La acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercitará ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los trámites y con los recursos establecidos en esta Ley. La acción caducará a los treinta días de la fecha de su celebración. Para los terceros perjudicados el plazo contará desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes podrán ejercitar la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos y la impugnación por los posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad. - Conforme esta disposición, legitimados para impugnar la validez del acto conciliatorio cuestionado, son las partes y los terceros. Los demandantes, atendiendo a los argumentos contenidos en su demanda invocan la ilegalidad y lesividad del acuerdo alcanzado, atribuyéndose con ello la condición de terceros ajenos a las partes signatarias. Tal condición no se admite por la parte demandada que invoca que han sido parte en aquel procedimiento de despido colectivo y que por tanto carecen de legitimación activa como parte que son para invocar razones de lesividad o ilegalidad.*

El art. 7 CE indica que los sindicatos de trabajadores contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos que les son propios y el art. 1.1 LOLS expresa que todos los trabajadores tiene derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Ambas disposiciones trasladan al ordenamiento el significado propio de la institución "sindicato" entendido como el instrumento básico del que se sirven los trabajadores para poder hacer frente a la situación de desigualdad en que se encuentran frente al empresario en el marco de la relación contractual laboral. Su



justificación histórica y operativa se fundamenta en constituirse como cauce que, aglutinando voluntades individuales, débiles y dispersas en una relación desigual frente al empresario pero todas integradas en controversias comunes, adquiere por razón del hecho asociativo un mayor potencial de interlocución y negociación que el de cada uno de los trabajadores a título individual. Para el cumplimiento de sus fines deviene imprescindible una transferencia de las voluntades individuales integrándolas en una voluntad unitaria, la que el sindicato personifica. Y así, el sindicato como entidad de naturaleza asociativa, adquiriendo personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar art. 4 LOLS, ostenta la capacidad de representar a los trabajadores en la defensa y promoción de los intereses de éstos; capacidad que en el modelo español no sólo lo es en relación a sus afiliados, sino que cumpliendo determinados requisitos de audiencia, detentan una singular posición jurídica a efectos de participación institucional y de acción sindical, art. 6.1 LOLS. La capacidad representativa se diseña en sus líneas básicas en el art. 6.3 LOLS, norma que en su apartado g) abre la vía para que dichas funciones puedan perfilarse con amplitud. Y es en el art. 41.4 ET al que remite el 51.2 donde se dota de capacidad representativa a los representantes legales y/o sindicales de los trabajadores para intervenir como interlocutores en el periodo de consultas y alcanzar los correspondientes acuerdos. Dicha capacidad se extiende luego al proceso judicial en el art. 124.1 LRJS que atribuye legitimación procesal a los representantes legales de los trabajadores y a los representantes sindicales. Tratándose de éstos últimos deberán tener implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo. El requisito de suficiente implantación ha sido analizado por este tribunal en su sentencia de 16-5-2014 asunto Panrico, donde se indicaba: la Sala entiende que la implantación suficiente que legitimaría para accionar vía art. 124 LRJS se logra cuando el sindicato ostente en el ámbito de la medida impugnada, en este caso un despido colectivo que afecta al total de la plantilla de PANRICO, un 7,69% del total de representantes unitarios electos, por ser dicho 7,69% el porcentaje necesario para poder ocupar uno de los 13 puestos, número máximo de miembros que integran la comisión representativa de los trabajadores para el periodo de consultas. Sin duda UGT y CCOO colman en este caso el citado requisito. Evidente resulta que la intervención de los sindicatos en los despidos colectivos, no es por su propio interés asociativo, sino por el interés de los trabajadores cuya representación tienen legalmente conferida y por cuanto el resultado de los acuerdos que se logren en el periodo de consultas o los que resulten de la sentencia dictada en el proceso del art. 124 LRJS, y una eventual conciliación dentro del mismo como ocurre en éste caso, lo son en relación a los despidos de dichos trabajadores, pues no es otro el objeto litigioso, de modo que serán ellos los directos destinatarios del resultado de la sentencia que conforme el art. 124.11 se dicte.

Y además dicha capacidad representativa a la que se anuda la capacidad procesal sólo es atribuible a los representantes legales o sindicales de los trabajadores sin que sea posible, conforme indica la STS de 26-12-2013 Rec 28/2013, la entrada de trabajadores individuales en un proceso colectivo como es el proceso del art. 124 LRJS, tanto en su regulación general como en la específica de su apartado 3 (referida ésta al supuesto concreto que entonces se juzgaba, caso Sodercan).



*Y continúa diciendo ésta sentencia La apertura a los trabajadores individuales, aun en el supuesto de que se limitara a los casos de ausencia de la representación colectiva, desestabilizaría el proceso y sin ninguna duda el propio resultado de la negociación en el periodo de consultas, pues, cuando los representantes colectivos hubieran llegado a un acuerdo, podría abrirse una impugnación colectiva por parte de trabajadores individuales que tendría la posibilidad de cuestionar no solo su despido, sino todos los despidos acordados. La desestabilización del acuerdo en el periodo de consultas es grave. Pero la del propio proceso no lo es menos.*

*Dicho de otro modo la falta de legitimación para intervenir en procesos colectivos de trabajadores a título individual lo es precisamente porque la misma descansa en sus entes de representación constituidos para resolver las controversias colectivas en el marco de las relaciones laborales.*

*Y corolario de todo ello es que los hoy demandantes fueron parte en el proceso de despido colectivo tramitado en autos 482/13 y como tal parte no pueden impugnar el acto de conciliación con causa en su lesividad o ilegalidad".*

Debemos destacar, por otro lado, que es criterio reiterado y pacífico en la doctrina constitucional, por todas STC 89/2001, 96/2001 y 88/2001, así como en la jurisprudencia, por todas STS 21-10-2010, rec. 59/2009 y 11-02-2014, rec. 742/2013, que prejubilados y jubilados no están legitimados para la impugnación de convenios colectivos por lesividad, por cuanto están representados por los representantes unitarios o sindicales, del mismo modo que los trabajadores en activo, quienes no pueden impugnar por lesividad un convenio colectivo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 165.1.b LRJS. – Del mismo modo el art. 165.1.a LRJS deja perfectamente claro que solo están legitimados para impugnar por ilegalidad un convenio colectivo los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, así como los sindicatos.

Por consiguiente, probado que la conciliación, alcanzada ante la Sala el 17 de febrero pasado despliega la misma eficacia que la prevista para los convenios colectivos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 156.2 LRJS, se hace evidente que no cabe impugnarla por ilegalidad o lesividad por los prejubilados a título individual, por cuanto los mismos estaban perfectamente representados por los sindicatos demandados por IBERIA en el procedimiento 337/2014, sin que ello les genere ningún tipo de indefensión, puesto que los sindicatos que no suscribieron la conciliación y el propio comité intercentros estaban perfectamente legitimados para impugnarla por ilegalidad, sin que quepa su impugnación por lesividad, por cuanto los prejubilados no ostentan la condición de terceros. – No pueden ostentar la condición de terceros, por cuanto estaban representados por el comité intercentros y por los sindicatos en un procedimiento de conflicto colectivo, en el que la empresa no pretendía únicamente dar una solución uniforme a los trabajadores, que ya se habían prejubilado, sino también a los que se van a jubilar hasta el 31-12-2015, mediante la interpretación del acuerdo de mediación, que fue aprobado por la mayoría sindical y ratificado el 2-04-2013 (hecho probado tercero), que fue convalidado por resolución complementaria de la DGE de 9-04-2013 (hecho probado sexto), siendo más que evidente que los futuros prejubilados estaban representados por los sujetos colectivos reiterados,



así como los ya jubilados conforme a la doctrina constitucional y la jurisprudencia mencionada más arriba.

Avala la tesis expuesta reiterada doctrina judicial, por todas STSJ País Vasco 6-05-2014, rec. 699/2014, donde se sostuvo lo siguiente:

"Una vez descartada la existencia de cosa juzgada hay que recordar que el artículo 156.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción otorga a los acuerdos obtenidos en proceso de conflicto colectivo la eficacia normativa y personal general de las que están dotados los convenios colectivos estatutarios, siempre que en la avenencia se cumplan los requisitos exigidos para ese tipo de convenios y que las partes firmantes ostentan la legitimación requerida al efecto, lo que es pacífico en este caso en que la conciliación fue suscrita por los Sindicatos EIA y CCOO, a los que pertenecen los 9 miembros del Comité de Empresa del centro de trabajo de Bilbao, en presencia del Presidente del órgano unitario, de CCOO, y de una vocal del mismo, de EIA, que mostraron su conformidad con el acuerdo, del que la empresa envió copia a la autoridad laboral que procedió a su registro (documentos 19 y 20 de los aportados por la demandada de los que se deduce además que la demanda de conflicto se interpuso en el mes de noviembre de 2012).

Ahora bien, el hecho de que la eficacia del citado acuerdo sea la propia de un convenio colectivo, y de que su impugnación se tenga que efectuar por la vía del proceso especial regulado en el artículo 161 y siguientes de la Ley Adjética Social, para cuya activación la demandante carece de legitimación, no significa que los trabajadores afectados negativamente por el pacto no puedan hacer valer sus derechos en los procesos individuales seguidos frente a concretas actuaciones de la empresa, y solicitar que no se les aplique aquél por vulnerar normas de derecho necesario, con infracción de lo dispuesto en los artículos 3.1 y 85.1 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 (sentencias 90/2001 y 56/2000, del Tribunal Constitucional, entre otras).

En la misma línea STSJ Burgos 8-11-2012, rec. 633/2012, donde se dijo:

Con carácter previo debemos de señalar que ante el SERLA comparecieron además de la representación de la empresa Fico Mirrors SA los 17 integrantes del Comité de Empresa siendo el objeto del mismo tal y como se refleja en el Acta "... el objeto deriva de aplicación de pacto de empresa" y el Acuerdo se alcanzó con todos los representantes (11) excepto con los del sindicato CSIF (5) que manifestó su disconformidad con el Acuerdo alcanzado. No se cuestiona ni la legitimación para alcanzar un acuerdo, ni tampoco que el objeto del mismo sea contrario a derecho así como ningún vicio del consentimiento o causa que invalide los contratos tampoco entendemos que el mismo conlleve una ilegalidad o lesividad, art. 67.1 de la LRJS, cuando expresamente se señala en el Acta " El acuerdo alcanzado entre las partes tendrá, la eficacia de un convenio



colectivo estatutario, según concurran, o no, los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 ". Por lo tanto en el Acuerdo aprobado ante el SERLA que es lo que es objeto de impugnación, indistintamente del acuerdo alcanzado no se está señalando expresamente que el pacto tenga o no carácter de estatutario por lo que en sí considerado tal Acuerdo ni es ilegal ni es lesivo. Por todo lo cual también este motivo del recurso debe de ser estimado y con ello la revocación de la sentencia recurrida".

Procede, por tanto, estimar la excepción de falta de legitimación activa de los trabajadores del colectivo de tierra que han impugnado individualmente la conciliación, puesto que ninguno de ellos ostenta la condición de tercero, que le legitime para impugnar la conciliación controvertida.

Doña Teresa Costas Durán defendió su condición de tercero, por cuanto se le había aplicado lo acordado en la conciliación impugnada, aunque no pertenece al colectivo de tierra, sino al de TCP, sin que podamos convenir con dicho criterio, por cuanto no ha probado que se le haya aplicado lo pactado en la conciliación de 17-02-2015, como no podría ser de otro modo, puesto que su simple lectura acredita que solo afecta al colectivo de tierra, de manera que, si se le hubiera aplicado el acuerdo reiterado, lo que resultaría extravagante, porque la reducción pactada para los TCP en el acuerdo de mediación es muy superior al del colectivo de tierra 14% y 4%, frente al 7% y 4%, podría impugnar dicha aplicación, por cuanto su colectivo no estaba incluido en su ámbito de afectación.

**CUARTO.** - Descartada la legitimación activa de los demandantes individuales, nos queda por resolver únicamente la demanda promovida por USO y USO-STA, quienes reprocharon, en primer término, que la finalidad de la conciliación impugnada era privar a los trabajadores prejubilados de la tutela judicial efectiva, apoyándose, a estos efectos, en las sentencias que estimaron su pretensión y especialmente en STSJ Madrid de 3-06-2014.

IBERIA se opuso a dicho reproche, por cuanto promovió el conflicto colectivo para promocionar una respuesta unitaria a la enorme conflictividad judicial causada por la aplicación de los descuentos al personal prejubilado del colectivo de tierra, que superaba las 400 demandas y había recibido respuestas judiciales contradictorias, por lo que hizo uso del derecho, garantizado por el art. 153.1 LRJS, de promover conflictos de interpretación o aplicación de acuerdos colectivos, siendo impensable que el ejercicio de ese derecho, que garantizó los principios de audiencia, contradicción y defensa de todos los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores, pueda vulnerar su derecho de tutela judicial efectiva.

La vulneración del artículo 24.1 CE, como recuerda STC 6/2011, EDJ 2011/10223, puede producirse en ese doble plano (lesiones intencionales y lesiones objetivas contrarias a la garantía de indemnidad) el análisis que a tal efecto corresponde efectuar a los órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en el primer ámbito (voluntad de represalia) pues, de quedar descartada la lesión desde ese prisma, será preciso adicionalmente ponderar y



valorar el derecho fundamental en juego examinando si se ha causado un daño al patrimonio jurídico del trabajador, aunque no se aprecie ánimo lesivo.

Debemos despejar, a continuación, si los demandantes han probado indicios razonables de violación del derecho a la tutela judicial efectiva y si es así, si los demandados han aportado una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

La resolución de ambos interrogantes exige rememorar los hechos más relevantes que han quedado acreditados:

- a. - El acuerdo de mediación, admitido por el 81, 8% de los representantes de los trabajadores de todos los colectivos de IBERIA, se remitió al ERE 72/2001, donde quedó perfectamente claro que el salario regulador se calcularía a la fecha de la extinción de los contratos de trabajo.
- b. - En el acuerdo, alcanzado el 2-04-2013, reproducido en el hecho probado tercero, se convino que el salario regulador de las prejubilaciones sería el de la fecha de la extinción del contrato.
- c. - Dicho acuerdo se convalidó por resolución complementaria de la DGE de 9-04-2013.
- d. - La empresa calculó el salario regulador a los prejubilados del colectivo de tierra desde el 15-03-2013.
- e. - Dicha política fue refrendada en la comisión de seguimiento de 14-08-2013.
- f. - Solo se ha presentado una demanda de conflicto colectivo por ASETMA, quien reclamó únicamente que no se descontara el 4% al colectivo de tierra desde el 15-04-2014, aunque desistió con posterioridad.
- g. - Se ha probado una fuerte conflictividad por parte de los prejubilados a título individual, quienes reclaman que no se les practique descuento alguno para el cálculo de su salario regulador, pendiendo actualmente más de 400 demandas.
- h. - Se han producido resoluciones judiciales contradictorias, aunque ninguna de ellas ha alcanzado firmeza.
- i. - IBERIA interpone demanda de conflicto colectivo con la finalidad de lograr una interpretación uniforme sobre el cálculo del salario regulador convenido en el acuerdo de mediación.
- j. - Se alcanza una avenencia ante la Sala, suscrita por el 79, 25% de los representantes de los trabajadores del colectivo de tierra.

Llegados aquí, debemos despejar si el ejercicio del derecho a promover una demanda de conflicto colectivo sobre la interpretación y/o aplicación de un acuerdo de mediación, suscrito por el 81, 8% de los representantes de los trabajadores de toda la empresa, cuando se está produciendo una fuerte judicialización con resultados contradictorios, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los prejubilados, a lo que anticipamos necesariamente una respuesta negativa. - La respuesta es negativa, por cuanto dicha pretensión se efectuó frente al comité intercentros y la totalidad de las secciones sindicales de la





empresa, quienes representan, como desarrollamos más arriba, a todo el personal activo y pasivo de la empresa, quienes pudieron, de haberlo considerado adecuado, oponerse a la pretensión empresarial. - No habiendo sido así, puesto que una mayoría cualificada convino con IBERIA, que la interpretación y aplicación de lo convenido por parte de la empresa se ajustaba a la intención de los negociadores, debemos concluir que no se ha producido vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los prejubilados.

**QUINTO.** - USO y USO-STA denuncian, por otro lado, que la conciliación impugnada retrotrajo injustificadamente una regulación peyorativa respecto a lo convenido en el acuerdo de mediación de 13-03-2013, sin que podamos coincidir, de ningún modo, con dicho reproche. - No podemos convenir con dicho reproche, porque la simple lectura de lo pactado en el acuerdo de conciliación (hecho probado décimo sexto), donde se afirma que el salario regulador ha de ser el existente en el momento de la extinción del contrato, nos permite concluir que coincide milimétricamente con lo pactado en el ERE 72/2001 (hecho probado primero), así como con lo convenido el 2-04-2013 por la comisión negociadora (hecho probado tercero), donde quedó perfectamente claro que el salario regulador se calcularía a la fecha de extinción de los contratos.

Conviene precisar aquí, que no estamos ante un despido colectivo típico, que se ejecuta inmediatamente después de la finalización del período de consultas, sino ante un despido masivo, que se ejecuta diferidamente hasta el 31-12-2015 atendiendo a la decisión voluntaria de los propios trabajadores. - Consiguientemente, si los negociadores conocían, como no podría ser de otro modo, que los despidos se ejecutarían en un período muy extenso, pese a lo cual pactaron que el salario regulador se calcularía a la fecha de extinción de los contratos, sin realizar excepción de ningún tipo, debemos concluir obligatoriamente que esa fue la intención de los negociadores, de manera que, acreditado que la empresa redujo las retribuciones del personal de tierra desde el 15-03-2013, los trabajadores, que pretendían prejubilarse, sabían que el salario regulador de su prejubilación sería el percibido en el momento de la extinción, porque así se había pactado.

Si hubiera alguna duda al respecto, queremos destacar los propios actos de las partes, concretados en el acuerdo de la comisión de seguimiento de 14-08-2013 (hecho probado décimo), donde quedó clara la intención de los negociadores. - Es también revelador que ningún sindicato interpusiera demanda colectiva para despejar las dudas interpretativas, que habían dado lugar a una gran conflictividad judicial, salvo la demanda de ASETMA que, como anticipamos más arriba, pretendía únicamente que no se redujera el 4% desde el 15-04-2014, acreditando, de este modo, que no existía conflictividad colectiva sobre una cuestión tan delicada en la empresa demandada.

**SEXTO.** - USO y USC-STA denuncian, por otra parte, que la conciliación impugnada no interpreta, sino que modifica lo acordado en la mediación de 13-03-2013, sin que coincidamos con dicha manifestación por las razones ya expuestas, por cuanto se ha acreditado contundentemente, a nuestro juicio, que lo convenido el 17-02-2015 ante esta Sala por IBERIA y los sindicatos mayoritarios se acomoda plenamente a lo pactado en mediación, cuya ejecución se encomendó al ERE





72/2001, donde quedó perfectamente claro que el salario regulador era el existente en el momento de la extinción, refrendándose dicho criterio en el acuerdo alcanzado el 2-04-2013 en la comisión negociadora del convenio, convalidada por resolución de la DGE de 9-04-2013, donde se subraya, una vez más, que el salario regulador de las prejubilaciones será el percibido en la fecha de extinción, que es exactamente lo pactado en conciliación, donde se introduce únicamente una novedad, consistente en la supresión de la reducción del 4% de las retribuciones desde el 15-04-2014, porque se alcanzó un acuerdo al respecto en el procedimiento de negociación del XX Convenio del personal de tierra de la empresa demandada.

**SEPTIMO.** - USO y USO-STA denuncian finalmente que la conciliación impugnada, negociada entre la empresa y los representantes del colectivo de tierra, se está aplicando a otros colectivos, particularmente a los TCP, sin que compartamos tampoco dicha denuncia.

Es cierto y no escapa a la Sala, que se han producido sentencias contradictorias (hecho probado décimo séptimo), que afectaron a TCP, pero dicha circunstancia no permite concluir en absoluto, que la empresa esté aplicando el régimen de prejubilación del personal de tierra al colectivo de TCP, como no podría ser de otro modo, puesto que las reducciones retributivas para dicho colectivo son muy superiores a las del personal de tierra (14% y 4% frente al 7% y 4% respectivamente). - Por lo demás, si la empresa está calculando el salario regulador de los TCP con las reducciones existentes en el momento de la extinción de sus contratos de trabajo, no necesita aplicar lo convenido en la conciliación impugnada, que afecta únicamente, tal y como venimos reiterando, al personal de tierra, puesto que en el ERE 72/2001, al que se remitió el acuerdo de mediación, quedaba perfectamente claro que el salario regulador sería el existente en el momento de las extinciones.

Por lo demás, aunque se hubiera probado, que no es el caso, que la empresa estuviera aplicando el régimen de prejubilaciones del colectivo de tierra al personal de TCP, dicha conducta le sería imputable a la propia empresa y nunca a la conciliación, donde quedó perfectamente claro que se aplicaba únicamente al colectivo de tierra.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

### FALLAMOS

En la demanda de impugnación de conciliación, estimamos la excepción de falta de legitimación activa de JESUS URIBE MANZANO, LEANDRO BATRES VALBUENA, FELIPE FAGUNDEZ FLORES, SOLEDAD CALVO ANGULO, PEDRO GARCIA HERNANDO, JOSÉ LUIS MÁLAGA JIMÉNEZ, M<sup>a</sup> JESÚS GARCÍA VEGA, PEDRO PAREJO PAULINO, SERAFÍN ALVARO DEL PICO, RUFINO PLATA GARCIA, JUAN JOSÉ ALVÁREZ TORRES, ÁNGEL MARTÍNEZ ARCEO, ANTONIA M<sup>a</sup> PÉREZ VILLAR, FRANCISCA VELASCO AGUDO, SALVADOR MINGUEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS MARTÍN MORENO, JOSÉ M<sup>a</sup> GONZÁLEZ GÓMEZ, M<sup>a</sup> DEL CARMEN DE LA FUENTE SEVILLANO, FÉLIZ BAHILLO GARCÍA, GERARDO ROVIDARCT RODRIGUEZ, ANTONIA M<sup>a</sup> PÉREZ VILAR, SANTIAGO QUINONEZ ARELLANO, MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ, ÁNGEL MARTÍNEZ ARCEO, ANTONIO



MARTÍN GONZÁLEZ, ISABEL MEDINA MUÑOZ, ÁNGEL CASTILLO GIMENO, ANA MARÍA CASAS HIDALGO, MARÍA DE LOS ÁNGELES COBOS MARTÍNEZ, MARÍA TERESA OCAÑA LÓPEZ, MARGARITA BARCO ÁLVAREZ, MARÍA CRISTINA ACERO SORIA, CONCEPCIÓN DE BLAS GARCÍA, MARÍA JESÚS ROVIRA RUÍZ, SENEN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA ESTHER MARTÍN DURÁN, CONCEPCIÓN MARTÍN SALAS, CARLOS DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN BAGLIETTO BORDAS, MARGARITA MENGIBAR MEDINA, ÁNGEL QUIROGA CANTERO, MARÍA ELENA FERNÁNDEZ CALLEJOMARÍA DEL CARMEN LASECA CANALEJO, MARÍA LUISA PACHECO ALONSO, MARIO SERRANO CASTRO, MARÍA CRUZ LÓPEZ ORZAEZ, MARÍA LUZ DIEZ VIYUELA, CARMEN MONGE ENRIQUE, REMEDISO LÓPEZ MARTÍNEZ, CARMEN GALVAN BELLO, MANUEL SIERRA ALONSO, ENRIQUE PLAZA MOYA, JUAN CLEDERA GARCÍA, JUAN JOSÉ NIETO VICENTE PEDRO DEL VALLE ALONSO, ABILIO ÁLVAREZ HERRANZ, BERNARDO GONZÁLEZ CARBALLO, MARÍA ISABEL BAUDOT LÓPEZ, JOSÉ LUIS GAGO LLORENTE, MARÍA TERESA AGUADO SOTOMAYOR, JOSÉ MARÍA RUÍZ GÓMEZ, MANUEL GUERRERO UNA, JOSÉ MANUEL SUÁREZ HERRAIZ, JULIO ENRIQUE PRAT CUESTA, MARÍA JESÚS SÁNCHEZ SEDANO, CARMEN PALOMINO FRANCO, CARLOS GÓMEZ SANZ, JUAN ANTONIO PERAL FERNÁNDEZ, ANTONIO OLIVA TROYA, ROBERTO MATEY MORENO, ÁNGEL LUIS PAREDES LÓPEZ, CONCEPCIÓN DÍAZ GONZÁLEZ, FÉLIX MAREGIL GONZÁLEZ, GABRIEL SÁNCHEZ-RICO NICASIO DÍAZ MAROTO FERNÁNDEZ CHECA, MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES LORENZO, PEDRO GARCÍA ROBLES, EMILIO CARMONA MONTOYA, GLORIA ANGULO DÍAZ, FRANCISCO HAVIER GUTIERREZ ORTEGA, MARÍA ROSA SASTRE SÁNCHEZ, PEDRO GÓMEZ RUBIO, MARÍA DOLORES JIMÉNEZ BARROSO, MONTSERRAT ARIAS QUIROGA, MARIANO LÓPEZ SANTOS, FILOMENO FERNÁNDEZ-INFANTES SÁNCHEZ-MONTAÑEZ, MIGUEL ÁNGEL CABRERO MORENO, MANUEL ROS CANO, JOSÉ MANUEL MIGUENS PÉREZ, PEDRO LUIS CHOZAS SANZ, MARÍA JOSEFA CAMPOS LOZANO, ENCARNACIÓN PATINO GIL, MARGARITA DÍAZ SOBRADO, MARÍA ROSA CLAUDIA MARTÍN SÁNCHEZ, LUISA CAMPO CELADOR, MANUEL OVALLE FERNÁNDEZ, ANTONIO DÍAZ CORREA, JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA, JUAN CARLOS ALISES DEL OLMO, JOSÉ MARÍA OCAÑA LÓPEZ, LUIS PEREDA PAZOS, TOMÁS BARBA PÉREZ, JOSÉ PADILLA BARAJAS, DOMINGO GURPEGUI RESANO, FEDERICO LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL PILAR PACHECO ALONSO, MARGARITA DÍAZ BARROSO, JOSÉ MARTÍNEZ VÁZQUEZ, JESÚS MARTÍNEZ PERETE, ROBERTO LINDE ALONSO, MANUEL RUÍZ LOSADA, MIGUEL MARINO GARCÍA CARDABA, PABLO CRIADO LÓPEZ, URBANO ÁLVAREZ ARCHIDONA, JAVIER PEDROSA SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS MONTES MORENO, CELESTINO ALMEIDA BLAS, FERNANDO BARRAGAN GÓMEZ, SANTIAGO REPRESA MARTÍN, ESPERANZA PASCUAL MORA, LUIS MONEDERO NAVARRO, MARÍA DEL PILAR ORTÍZ ANGULO, MARÍA PILAR LÓPEZ-BREA DE LA CRUZ, MARGARITA VENTURA CUEVAS, MARÍA PILAR IGLESIAS RAMOS, PEDRO RUÍZ MENJIBAR, MARÍA LUISA ANTOLIN ARIAS, ANTONIO ÁNGEL ACEBES ALONSO, MARÍA LUISA GOMIZ MANCHA, JOSÉ MANUEL BELLOT VALLEJO, MANUEL LÓPEZ GARCÍA, JUAN JOSÉ MARTÍN CLEDERA, ISMAEL MICO MICO, AVELINO MORENO VADILLO, JOSÉ LUIS GUINALES MARCOS, MARÍA ELISA PÉREZ GARCÍA, MIGUEL ALMARAZ UBAGO, ÁNGEL GALIANO RAMÍREZ, LUIS MIGUEL ESTEBAN HERNANDO, MANUEL BERRIATUA CLEMENTE, RUFINO COLOMO GONZÁLEZ, FAUSTINO FERNÁNDEZ BAIZAN, ARACELI HERRERO ZOFIO, GONZALO PESQUERO RIONEGRO, JUAN MANUEL PEÑAS ESTIRADO, CARLOS ÁLVAREZ ASENSIO, MARÍA ESPERANZA ALONSO CENAMOR, BENITO HERNANDO DE LA MORENA, JOAQUÍN SALGUERO PÉREZ, ALFREDO MERINO IRUELA, MANUEL CAMINERO OMERÓ, ANTONIO CAÑADAS RABADAN, ANTONIO MACEBO HERNÁNDEZ,



VICTORIA ORTÍZ ANGULO, PEDRO ANTONIO MENCHEN TORRES, ALFONSO MERCHAN RÍOS, ANA MARÍA SUAREZ FUENTE, MARÍA DEL PILAR CARMEN DE LA CRUZ HICAR GIL, VICENTA DIAZ-CANEJA DIAZ-CANEJA, MARÍA LUISA PICAZO NÚÑEZ, MARÍA ANTONIA MATEOS IBÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO DEL AMO PRZYBYL, ÁNGEL MUÑOZ MARTÍNEZ, EMILIA GONZÁLEZ ALCANTARILLA, JUAN CARLOS DE GABRIEL SEOANE, MARÍA MERCEDES GALAN PORTELA, GILBERTO PALOMO ARNAIZ, MARÍA CONSUELO LÓPEZ PASCUAL, FRANCISCO OLMEDO SALVAS, RAFAEL DEL OLMO RAMÓN, ALBERTO HUERTA PÉREZ, MARÍA VICTORIA ALVAREZ DE ARCAYA, BASTERRA, TERESA PABLO ORTÍZ, MARÍA LOURDES DUQUE CHERTUDI, MARÍA PILA ABRIL BOLADO, ENRIQUE SAGRARIO GUZMÁN, JAVIER LOSADA MUÍNELO, ANTONIO SANTIAGO GÓMEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO AURELIO SEDANO CARRASCO, EMILIA GONZÁLEZ VILLALOBOS, REYES CANTERO MUÑOZ, CARLOS JAVIER BRAVO FUNGUEIRO, JOSÉ ALFONSO PAREDES CERRATO, ENRIQUE CALDERON REYES, SALVADOR GÓMEZ RODRIGUEZ, RAMÓN RODRIGUEZ DE LA RUBIA JIMENEZ, LUIS HUETO PÉREZ, EMILIO ALONSO SERRANO, PEDRO GARCÍA ROS, LEONOR CATALINA ACEVES, JOSÉ LUIS TIRADO SÁNCHEZ, JESÚS BAILE GÓMEZ, LUIS FERNANDO GUEL BENZU ESPARTERO, PEDRO GONZÁLEZ NAVARRO, MANUEL AREVALO CORREDOR, MARÍA ROSA APOLONIA MORALES DE LA PASCUA, ANTONIA MARTÍNEZ CANALES, PURIFICACIÓN QUIROS PÉREZ, JUAN CARLOS CAZALLAS HERNÁNDEZ, CANDIDO QUIROGA CANTERO, GONZALO REY FERNÁNDEZ, LEOPOLDO FERRIS CAMPOS, DOMINGA MANUELA MARTÍNEZ RODRIGUEZ, FERNANDO ENRIQUE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ABELARDO VÁZQUEZ LÓPEZ, JUAN DEL VALLE CANCELA, ENRIQUE RAFAEL FERNÁNDEZ GUTIERREZ, JOSÉ LUIS LERIN FERNÁNDEZ, CLEMENTE LAMELA AGUILAR, MARGARITA NATIVIDAD CRIADO, FELIPE MARTÍN GARCÍA-ARCICOLLAR, PALOMA RIBER HERRAEZ, FERNAND SUAREZ POSSE, ESPERANZA MULET ORTIZ, SATURNINO BALLESTER ANDREU, JOSÉ MANUEL PERTUSA SANSANO, RAFAEL VALERO SEBASTIAN, MARGARITA SÁNCHEZ DIEZ, MARÍA ELENA REY FERNÁNDEZ, VALERIANO RAMÍREZ JIMENEZ, RAFAEL ORTEGA LOZANO, MARÍA EUGENIA ALMOR SABIRON, MARÍA DEL CARMEN ARMERO ESCUDER, JUAN LUIS CELADA SEBASTIAN, PEDRO ARAGÓN GASCON, FERNANDO ANTON CARRION, SERAFÍN PAREDES CABALLERO, EPIFANIO MARTÍNEZ FERRERO, JAUME GRIMALT BALAGUER, FRANCISCA MARÍA BESTARD ROMAN, BERTA GRADAILLE ORTELLA, JUAN MARÍN ESPADA, JUAN PEDRO VIGUERAS MARTÍNEZ, JOSÉ NAVARRO ALFARO, MANUEL SANTIAGO QUINTANILLA, TINA MUÑOZ HERNÁNDEZ, FERNANDO PALACIOS MUÑOZ, JESÚS ÁNGEL MAYORGA MAYORGA, JULIÁN MONTERROSO CORCHERO, EDUARDO ALONSO CABRERA, RAFAEL RATA PASCUAL, JOSÉ LUIS DE LA RIVA ANGULO, MARTÍN GARCÍA MORA, JOSÉ ISAAC FERRERO TRAPOTE, MARÍA JESÚS SOTILLOS GÓMEZ, FRANCISCO GALLARDO LÓPEZ, JACINTO GUTIERREZ ALVÁREZ-BRAÑA, ESTHER LOBATO HERNÁNDEZ, MARÍA TERESA COSTAS DURÁN.

Desestimamos la demanda de impugnación de conciliación, promovida por USO y USO-STA, a la que se adhirió CGT y absolvemos a IBERIA LAE OPERADORA, SAU, UGT, CCOO, ASETMA y SEPLA de los pedimentos de la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.



Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 600 euros previsto en el art, 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad con el art, 230 del mismo texto legal, todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en el Banco de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569 92 0005001274 haciendo constar en las observaciones el nº 2419 0000 00 0081 15; si es en efectivo en la cuenta nº 2419 0000 00 0081 15, pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen Recurso de Casación contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2014, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concorra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.



### Voto particular

Que formula La Ilma. Magistrada D<sup>a</sup> Emilia Ruiz-Jarabo Quemada, de conformidad con lo establecido en el artículo 260.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la sentencia dictada por la Sala el (25 de Junio de 2015) en el procedimiento nº 81/2015 para sostener, con pleno respeto a la decisión mayoritaria, la posición que mantuvo en la deliberación, en favor de estimar que el proceso nº 337/14 en el que se acordó la conciliación judicial impugnada en las demandas acumuladas, no resultaba incardinable en el art. 156.2 LRJS sobre proceso de conflictos colectivos, y, por tanto, se debió apreciar la excepción de inadecuación de procedimiento y falta de acción, incompetencia funcional de la Sala y falta de legitimación activa, estando legitimados los trabajadores demandantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.6 LRJS, en cuanto terceros perjudicados por el acto de conciliación, así como los sindicatos demandantes para impugnar la validez de la conciliación, que se ha alcanzado en un proceso, cuyas pretensiones, no pueden ser objeto de conflicto colectivo, dado que nos hallamos ante un despido colectivo, cuyo objeto, no puede ser aquello que la ley ha preservado por expresa disposición para ser examinado en la demanda individual y de forma individual por el único legitimado para ello, el trabajador afectado, como forma de dar cumplida satisfacción a su derecho, y, en consecuencia, la demanda debió ser estimada y declarada la nulidad de la conciliación judicial de fecha 17 de febrero de 2015 acordada en los autos nº 337/2014 entre Iberia Líneas Aéreas de España SAU, como parte demandante y los sindicatos demandados UGT, CC.OO. y ASETMA, a la que se opusieron los sindicatos STAVLA, CESH, USO, CTA, CGT y ATCA.

#### 1).- El supuesto enjuiciado.

Se trata de un supuesto de despido colectivo que finalizó con acuerdo de fecha 2 de abril de 2013, recaído en el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo planteado por la empresa, consecuencia de la mediación desarrollada por el mediador, y una vez alcanzado el acuerdo, con fecha 9 de abril de 2013, la Dirección General de Trabajo dictó resolución por la que se acordaba autorizar la extensión del plazo de acogimiento y aplicación del expediente 72/01 hasta el 31 de diciembre de 2015, respecto del personal integrado en el colectivo de tierra, para la extinción de un máximo de 2256 contratos de trabajo del colectivo de trabajadores de tierra.

La empresa ha calculado el salario regulador de todos los trabajadores del colectivo de tierra, que se han acogido a la extinción de la relación laboral por prejubilación a partir del 15-03-2013 con una reducción del 11%. No obstante para el personal cuyo contrato se extinguió a partir del 14/04/2014 la empresa está reduciendo el 7%.

En relación a la determinación del salario regulador que debe regir las condiciones de prejubilación de los trabajadores acogidos al ERE se han planteado numerosas demandas ante los Juzgados de lo Social postulando que se reconociera el derecho a que el salario regulador de la prejubilación se calcule sin la aplicación de la regla reducciones salariales del 11% aplicadas por la empresa, así como el abono de las



cantidades dejadas de percibir conforme al salario regulador así calculado desde el momento de su prejubilación, o, subsidiariamente, que el salario regulador de la prejubilación sea calculado sin aplicación de la reducción salarial del 4% acordada por la empresa, debiendo estar abonarle las cantidades dejadas de percibir conforme al salario regulador así calculado desde el momento de su prejubilación, que han dado lugar a pronunciamientos dispares de los Juzgados de lo Social y a una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 3 de junio de 2014 dictada en el recurso de suplicación 104/2014 por la que se estima el recurso interpuesto por el actor y se declara que el salario regulador que debe regir las condiciones de prejubilación lo es sin repercusión del 7% de ajuste salarial que se venían aplicando al momento de la extinción, ni la reducción salarial del 4%.

Con fecha 2 de diciembre de 2014 se interpuso por la empresa Iberia LAE SAU Operadora, demanda de conflicto colectivo, por la que se solicitaba la interpretación del acuerdo de mediación para que se dicte sentencia por la que se declare que el salario regulador para el personal del colectivo de tierra que cause baja en la Compañía con motivo del despido colectivo y que ve extinguida su relación en el marco de la modalidad de "prejubilaciones", ha de ser el existente en el momento de la extinción de la relación laboral.

Habiéndose alcanzado una conciliación ante esta Sala, sobre el salario regulador para el personal de colectivo de tierra que cause baja la compañía y que ve extinguida su relación en el marco de la modalidad de "prejubilaciones" del ERE 72/01, entre Iberia Líneas Aéreas de España SAU, como parte demandante y los sindicatos demandados UGT, CCOO y ASETMA, a la que se opusieron los sindicatos STAVLA, USO, CTA, CGT y ATCA. Que es la que es objeto del presente procedimiento.

## 2).-La sentencia mayoritaria de la Sala.

Tras afirmar que la conciliación impugnada, se alcanzó en un procedimiento de conflicto colectivo entre la empresa y los sindicatos UGT, CCOO y ASETMA, quienes acreditaban entonces el 79,25% de los representantes del personal del colectivo de tierra, que es el afectado únicamente por la conciliación, sostiene que lo acordado en conciliación en el procedimiento de conflicto colectivo despliega la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el artículo 82 ET, puesto que quienes conciliaron acreditaron las legitimaciones exigidas por los artículos 87,88 y 89 del ET, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.4, por consiguiente concluye que no cabe impugnarla por ilegalidad o lesividad por los prejubilados a título individual porque los mismos estaban representados por los sindicatos demandados por Iberia en el procedimiento 337/2014 en el que se alcanzó la conciliación, por lo que los prejubilados no ostentan la condición de terceros, y concluye por tanto estimando la excepción de falta de legitimación activa de los trabajadores del colectivo de tierra que han impugnado individualmente la conciliación, puesto que ninguno de ellos ostentan la condición de terceros. En cuanto a la demanda promovida por USO y por USO-STA argumenta que no se ha producido vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los prejubilados así





como que la intención de los negociadores fue que el salario regulador de su prejubilación era el percibido en el momento de la extinción sin que la conciliación impugnada modificara lo acordado en la mediación de 13 de marzo de 2013, sino que se acomoda plenamente a lo pactado en la mediación.

3).- Disiento del parecer mayoritario expresado en la sentencia de la Sala, la cual suscribo por imperativo legal, sin perjuicio de expresar aquí mi contraria posición al respecto, pues entiendo que se debió estimar la demanda, porque:

El acuerdo transaccional homologado ante esta Sala 17 de febrero de 2015 impugnado en el presente procedimiento no resultaba incardinable en el art. 156.2 LRJS sobre proceso de conflictos colectivos, y, por tanto, se debió apreciar la excepción de inadecuación de procedimiento y falta de acción, estando legitimados los trabajadores demandantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.6 LRJS, en cuanto terceros perjudicados por el acto de conciliación, así como los sindicatos demandantes para impugnar la validez de la conciliación, que se ha alcanzado en un proceso, cuyas pretensiones, no pueden ser objeto de conflicto colectivo, dado que nos hallamos ante un despido colectivo, cuyo objeto, no puede ser aquello que la ley ha preservado por expresa disposición para ser examinado en la demanda individual y de forma individual por el único legitimado para ello, el trabajador afectado, como forma de dar cumplida satisfacción a su derecho.

La acción de reclamación individual de derechos y cantidad derivada a su vez de la existencia de un despido colectivo, que no de conflicto colectivo, tiene una normativa específica: el art. 124 LJS. Esta norma es específica y expresamente clara a la hora de establecer las particularidades de este tipo de procesos.

Por otro lado, la especificidad del proceso de despido colectivo y su relación con las reclamaciones individuales derivadas del mismo es tal que el legislador lo ha separado claramente del proceso de conflicto colectivo, declarándolo así al final del art. 153.1 de la LRJS.

En consecuencia, las acciones individuales derivadas de despido colectivo solo se ven afectadas por las normas de esta modalidad procesal, no por las de conflicto colectivo pues ello pugnaría no solo con la propia esencia del proceso de despido colectivo sino también, y especialmente, con el básico pero esencial derecho de los trabajadores individualmente afectados a ejercer la impugnación que les otorga el artículo 24.1 CE, al considerar que se priva al trabajador individual del derecho a una defensa plena y en libertad de argumento y pruebas que podrían ver enervadas sus acciones, por el ejercicio de acciones empresariales de conflicto colectivo (con sus respectivos recursos) en relación con su propia decisión extintiva, generándose así una situación que ciertamente solo favorece a la empresa que, además y sin trabas, puede llevar a efecto su decisión de extinción.

La conciliación celebrada ante esta Sala en fecha 17 de febrero de 2015, argumenta la sentencia mayoritaria es convenio colectivo porque ha sido adoptada por las partes legitimadas con las legitimaciones exigidas por los artículos 87,88 y 89 del ET.



Criterio que no comparto ya que, por el contrario, estimo que no puede considerarse que la expresada conciliación tenga el mismo valor y eficacia que el acuerdo homologado por la autoridad laboral (que según la doctrina del TS, entre otras, STS 2-06-2014 Rec. 2534-2013 debe entenderse que el acuerdo logrado en el marco de un ERE y fruto de la negociación colectiva, tiene análoga eficacia a lo acordado en Convenio Colectivo).

En primer lugar, porque no hay norma específica que establezca que un acuerdo como el logrado el 17 de febrero de 2015 sobre la materia allí tratada y por las partes que intervinieron tenga la consideración de convenio colectivo. Al respecto los despidos colectivos tienen una tramitación específica en los arts. 124 y ss. de la LJS no resultando aplicable a los mismos la previsión del art. 156.2 LJS, sino exclusivamente lo establecido en el art. 160 por la remisión que efectúa el 124.3 LJS. En segundo término, los requisitos subjetivos, objetivos y la materia sobre la que versa el proceso de negociación para el que estaban legitimadas las partes son diferentes: período de consultas que precede al despido colectivo, lo que es diferente del ámbito del art. 82 del ET. En tercer lugar, porque en todo caso sería necesario que las partes negociadoras hubieran ostentado la legitimación y adoptado el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por los arts. 82 y ss. del ET, lo que no en modo alguno consta, sin que pueda extrapolarse la legitimación para negociar el período de consultas del ERE, cuyo acuerdo se logró en 2013, con la legitimación para conciliar la interpretación del acuerdo del ERE, llevada a cabo dos años después, cuando la mayoría de los trabajadores prejubilados ya habían extinguido sus contratos de trabajo en 2013, y por ello, los sindicatos que se conciliaron, no ostentaban representación alguna de los trabajadores que habían cesado en la empresa. Finalmente, porque no debe perderse la perspectiva de que el pacto logrado el día 17 de febrero de 2015 es, y debe ser, un acto de aplicación de un acuerdo normativo previo. En suma, si los representantes que suscribieron el acuerdo no tenían las legitimaciones inicial, deliberativa y decisoria y por la materia, regulada en los 87 a 89 del ET, ni hay registro ni publicación del acuerdo, ni disposición legal que le atribuya valor de convenio debemos descartar que se trate de un acuerdo con valor de convenio colectivo.

Lógica consecuencia de cuanto antecede es que la conciliación de 17 de febrero de 2015 en el aspecto que examinamos no pudo disponer válidamente de lo establecido en un convenio colectivo, reduciendo lo en él reconocido. El convenio se impone al acuerdo reduciendo el margen de la libertad contractual, opera frente a él limitando de forma preceptiva e indisponible el contenido del pacto, por encima de la voluntad de las partes.

No puede obviarse que se trata de un supuesto de despido colectivo que finalizó con acuerdo de fecha 2 de abril de 2013, recaído en el período de consultas del procedimiento de despido colectivo planteado por la empresa, consecuencia de la mediación desarrollada por el mediador, y una vez alcanzado el acuerdo, con fecha 9 de abril de 2013, la Dirección General de Trabajo dictó resolución por la que se acordaba autorizar la extensión del plazo de acogimiento y aplicación del expediente 72/01 hasta el 31 de diciembre de 2015 y la extinción de 2256 contratos de trabajo respecto del colectivo del personal de tierra.





En estos supuestos, los afectados pueden demandar individualmente si cuestionan las bases de cálculo de la indemnización (antigüedad, cuantía del salario, módulo indemnizatorio...), la aplicabilidad al sujeto concreto, la procedencia de la extinción individual específica y en general todas aquellas cuestiones que a título individual solo se pueden plantear en demanda también individual.

En definitiva, existente acuerdo homologado por la autoridad laboral (que según la doctrina del TS, entre otras, STS 2-06-2014 Rec. 2534-2013 debe entenderse que el acuerdo logrado en el marco de un ERE y fruto de la negociación colectiva, tiene análoga eficacia a lo acordado en Convenio Colectivo y es cosa juzgada inter partes) es posible la demanda individual para cuestionar la aplicación individual de determinados extremos del pacto, no hay razón alguna para que el acuerdo logrado en el proceso (judicial) colectivo, esto es, el solo hecho de la homologación vete o impida el conocimiento de determinados extremos de fondo de las demandas destinadas a cuestionar esa misma aplicación individual.

La homologación judicial sólo es un elemento que confiere a los pactos transaccionales una especial virtualidad pues además de abrir la vía de apremio convierte en judicialmente indiscutible la celebración de la transacción misma haciendo constar en su documentación (auto o decreto) también de forma indiscutible que proceso se ha querido evitar: en este caso el seguido ante la Audiencia Nacional en la controversia conformada por la demanda -objeto procesal- atendiendo a las previsiones legales, de tal forma que en los procesos individuales puede oponerse la excepción de contrato transaccional judicial -cosa transigida- en relación con el objeto del proceso del despido colectivo, no en aquello que la ley ha preservado por expresa disposición para ser examinado en la demanda individual y de forma individual por el único legitimado para ello, el afectado, y como forma de dar cumplida satisfacción a su derecho, satisfacción que podrá lograrse de muy diferentes maneras incluida la aplicación si procede de las restantes previsiones del pacto.

La conciliación (o transacción) sea extrajudicial o judicial es resultado del acuerdo, de un contrato, y produce el efecto de sustituir una relación jurídica controvertida por otra cierta y no controvertida, extinguiendo los derechos y acciones en que trae causa y originando nuevos vínculos y obligaciones. En cualquier caso, es ante todo y sobre todo un contrato mediante el que las partes sacrifican recíprocamente determinados intereses involucrados en una situación litigiosa con el objeto o causa de extinguir ese estado de litigiosidad ( art. 1809 CC).

El objeto del negocio jurídico que toda transacción judicial conlleva, viene representado por el objeto del proceso sobre el que se puede disponer y al que se quiere poner término. En suma, su objeto lo constituye el objeto del proceso, es decir, las pretensiones de las partes que se encuentran en conflicto. Por ello, la naturaleza del objeto procesal o los intereses públicos o privados puestos en juego pueden condicionar o limitar el poder de disposición de las partes. Además, siendo esencialmente y ante todo un contrato la transacción siempre está expuesta a que se interprete conforme a las reglas de interpretación de los contratos y se discuta sobre su valor y eficacia o la extensión de sus efectos. Otra circunstancia adicional



concorre en el supuesto de autos: el legitimado para interponer la demanda colectiva y para su resolución por acuerdo no es la parte que recibe los efectos; la parte que recibe los efectos de la sentencia o acuerdo (trabajador individual) tiene derecho a examinar en el proceso individual la extensión y aplicación de los efectos a la hora de materializar la condena.

Estos efectos cuando se trata de la sentencia de proceso colectivo son simplemente declarativos. Si la transacción se refiere al objeto litigioso o procesal el efecto debe ser igualmente declarativo, como la sentencia. El efecto declarativo se materializa e individualiza en el proceso ante el Juzgado de lo Social. El problema surge porque en la transacción examinada se contienen elementos ajenos al objeto propio del proceso de despido colectivo planteando un proceso de conflicto colectivo pretendiendo que los mismos produzcan necesariamente un efecto constitutivo e incluso sustitutivo en la parte receptora de los efectos (el trabajador) de tal forma que el acuerdo en su totalidad sea la causa y fuente de una nueva relación jurídica que sustituya a la individual y, como consecuencia, sobrepasando los límites del art. 1815 CC. elimine, limite o condicione en sus términos el examen de la demanda individual cuando, en realidad, la resolución del proceso de despido colectivo solo puede producir efectos declarativos: declaración que se superpone a la relación allí discutida, aclarándola (existen las causas para el despido), con efectos ciertos y vinculantes.

Las prestaciones extrañas al objeto litigioso del proceso de despido colectivo incluidas en la transacción no son una declaración que se superponga a la relación discutida, aclarándola, sino la creación de un título distinto anexo a aquella declaración, sujeto sin duda a las reglas de interpretación de los contratos y cuyos efectos no son necesariamente ciertos y vinculantes para el Juzgado de lo Social, pues para este solo lo es el efecto declarativo de lo que resulte de la sentencia colectiva o del acuerdo que estrictamente la sustituya en este aspecto.

La transacción es un contrato de eliminación de una controversia, en el caso que examinamos, expresamente se refiere en la demanda, de la controversia judicializada ante los juzgados de lo social y la Sala de lo Social del TSJ de Madrid. Las partes llegaron a una conciliación sobre la interpretación y aplicación en el marco del despido colectivo 97/13, del acuerdo de mediación (de fecha 13 de marzo de 2013) al personal de tierra que vea extinguida su relación laboral a través de la modalidad de "prejubilaciones" prevista en el ERE 72/01, se establecieron criterios para determinar el salario regulador para el personal del colectivo de tierra que cause baja en la compañía y que ve extinguida su relación en el marco de la modalidad de "prejubilaciones", significando que conforme al artículo 124 LJS el objeto procesal de la demanda de impugnación colectiva del despido podía fundarse en los siguientes motivos:

- a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita.
- b) Que no se ha realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se ha respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal.



- c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.
- d) Que la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas.

La sentencia, en su caso, podía tener los siguientes pronunciamientos:

Se declarará ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.

La sentencia declarará no ajustada a Derecho la decisión extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva.

La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. En este supuesto la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 123 de esta Ley.

También se prevé legalmente cuando la decisión extintiva no se haya impugnado por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del artículo 124 o por la Autoridad Laboral de acuerdo con el artículo 148 b) LJS, una vez transcurrido el plazo de caducidad de 20 días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores, el empresario podrá interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva.

Además, es compatible por ley con la impugnación individual. La conciliación judicial no puede contener circunstancias que nunca pudieron ser parte del objeto del proceso colectivo y por tanto objeto de la sentencia, porque legalmente no es posible y no es competencia de la Audiencia Nacional (la competencia para el enjuiciamiento y determinación de los parámetros individuales corresponde al juzgado de instancia que conoce de la demanda individual) puesto que hurta o al menos limita el derecho de acceso a los tribunales de los afectados para la satisfacción plena de sus derechos, que no responde a las previsiones legales de competencia legitimación y de coordinación de procesos colectivos y de procesos individuales y que además, desde mi punto de vista, excede de la adecuada comprensión de lo que es el negocio jurídico de la transacción judicial y su relación con las normas que examinamos. Por otro lado, en este supuesto el despido colectivo no ha sido objeto de demanda colectiva formulada por los representantes de los trabajadores porque se ha llegado a un acuerdo y los afectados pueden demandar individualmente si cuestionan las bases de cálculo de la indemnización (antigüedad, cuantía del salario,



módulo indemnizatorio...), La aplicabilidad al sujeto concreto, la procedencia de la extinción individual específica y en general todas aquellas cuestiones que a título individual sólo se pueden plantear en demanda también individual

Por todo ello, los parámetros específicos a aplicar en la extinción individual se deben examinar en los procesos individuales y por ello la conciliación celebrada ante esta Sala en fecha 17 de febrero de 2015, es un acuerdo que rebasó los límites del posible objeto transaccional del que no podía conocer la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, siendo inadecuado el proceso de conflicto colectivo seguido por la empresa que carece de legitimación activa para plantearlo. El acuerdo suscrito alcanzado en conciliación judicial no está firmado por cinco de los sindicatos demandados y no consta que los actores estén afiliados a los sindicatos firmantes, por lo que el acuerdo conciliatorio no puede tener eficacia normativa alguna, tampoco tiene una eficacia personal general en el ámbito de la empresa.

Las consideraciones anteriores determinan la nulidad de la conciliación celebrada en fecha 17 de febrero de 2015 ante esta Sala y por ello la demanda debió ser estimada por invadir aquello que la ley ha preservado por expresa disposición para ser examinado en la demanda individual y de forma individual por el único legitimado para ello, el afectado, y como forma de dar cumplida satisfacción a su derecho, satisfacción que podrá lograrse de muy diferentes maneras incluida la aplicación si procede de las restantes previsiones del pacto. Porque ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal y no estando legitimados los firmantes, se deduce que el acuerdo suscrito por las partes firmantes es nulo en virtud de lo dispuesto en el artículo 1259 del Código Civil. Nos hallamos ante una resolución del Ministerio de Empleo de fecha 9 de abril de 2013 que autoriza la prórroga del ERE 72/01 hasta el 31/12/15. En estos supuestos, los afectados pueden demandar individualmente si cuestionan las bases de cálculo de la indemnización (antigüedad, cuantía del salario, módulo indemnizatorio...), la aplicabilidad al sujeto concreto, la procedencia de la extinción individual específica y en general todas aquellas cuestiones que a título individual solo se pueden plantear en demanda también individual. Debiéndose apreciar en el procedimiento en el que se alcanzó la conciliación las excepciones de incompetencia funcional de la Sala, inadecuación de procedimiento, falta de acción y falta de legitimación activa.

Desde otro punto de vista, este asunto presenta similitudes con el seguido ante esta Sala sobre el Grupo Prisa, En los que hubo una conciliación de fecha 14 de enero de 2012 en el procedimiento de despido colectivo y una posterior demanda de la empresa sobre conflicto colectivo en la que se solicitaba la interpretación de la conciliación que fue estimada por esta Sala por sentencia de fecha 16 de mayo de 2014 (proc. 75/14) que ha sido revocada por sentencia del TS. En este asunto existe un acuerdo en el período de consultas de un ERE y una demanda de conflicto colectivo solicitando la interpretación del acuerdo que ha dado lugar a la sentencia mayoritaria de la Sala de la que discrepo por las razones expuestas.

Madrid a 25 de Junio de 2015.